GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

RENTA O EXTORSIÓN

Victimarios y víctimas de las maras en El Salvador

Luis Enrique Amaya
y Juan José Martínez d'Aubuisson

COALICIONES POR LA RESILIENCIA

OCTUBRE 2021

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer, en primer lugar, a The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC), en particular a Guillermo Vázquez del Mercado, Ana Castro, Siria Gastélum Félix y Adrián Ancira por su decidido e invaluable apoyo en la realización de este estudio.

Asimismo, quieren trasladar un especial agradecimiento a las personas que libre y desinteresadamente abrieron una ventana de acceso a sus vidas y sus historias. Sin su generosidad, este trabajo no habría sido posible. A todos y todas, muchísimas gracias.

Este documento fue posible gracias al financiamiento del Gobierno de Canadá a GI-TOC. El contenido es responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja el punto de vista de GI-TOC ni del gobierno de Canadá.

Canada

SOBRE LOS AUTORES

Luis Enrique Amaya es licenciado en Psicología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Trabaja como consultor internacional e investigador en seguridad ciudadana y se especializa en el análisis y la gestión de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia. En solitario o en colaboración, ha escrito artículos académicos que se han publicado en revistas arbitradas e indexadas.

Juan José Martínez d'Aubuisson es licenciado en Antropología Sociocultural por la Universidad de El Salvador. Ha escrito, en solitario o en colaboración, varios artículos académicos y libros, entre los que destacan *Ver, oír y callar: Un año con la Mara Salvatrucha 13*, *El Niño de Hollywood* y *Crónicas negras*.

© 2021 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Fotografía de portada: © *AFP vía Getty Images*

Para información adicional dirigirse a:
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France, 23
Geneva, CH-1202
Switzerland

www.GlobalInitiative.net

CONTENIDO

Resumen iii
Introducción 2
Comienzan las extorsiones 4
Denuncias de extorsión 7
Flujo del dinero 10
Las víctimas 16
Conclusiones y recomendaciones 20
Referencias 22

RESUMEN

Este informe describe la dinámica de las extorsiones en El Salvador a la luz de la estructura y el funcionamiento de las maras o pandillas y muestra los modos en los que las víctimas padecen los efectos negativos de la extorsión y se adaptan a ellos. Las recomendaciones que se presentan apuntan a informar la formulación e implementación de políticas públicas o estrategias que contribuyan a la prevención y la atención de la problemática de las extorsiones en El Salvador.

Claves

- Los mecanismos extorsivos actuales de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 comenzaron a delinearse en el primer lustro del siglo XXI, aunque tienen raíces en dinámicas históricas que datan de muchos años antes.
- En los últimos años, las pandillas han exhibido cambios importantes en su identidad sociocultural. En la actualidad, están más centradas en conseguir dinero y administrarlo.
- Desde el punto de vista de las víctimas, la extorsión es un acto único u ocasional; en cambio, la «renta» se trata de una acción sistemática o periódica. Por tanto, en sus palabras, muchas de ellas pagan «renta», no extorsión.
- Las consecuencias de la extorsión no son solo de índole económica, sino también social y psicológica. Las víctimas afrontan estados permanentes de estrés, ansiedad y desesperanza o indefensión y desconfían tanto de las instituciones formales como de sus vecinos.

INTRODUCCIÓN

San Salvador. Pobladores caminan en Ilopango, territorio dominado por Barrio 18, una de las principales pandillas en disputa en el país desde hace más de 20 años. *© Giles Clarke/ Getty Images*

Las pandillas de origen californiano Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 arribaron a El Salvador a través de procesos de deportación de Estados Unidos en la década de 1990. Las dos se formaron en la ciudad de Los Ángeles en distintos momentos del siglo XX. El Barrio 18 se escindió de la pandilla Clanton 14 en la década de 1960[1] y, como la mayoría de las pandillas hispanas de esa ciudad, estaba integrada por jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes mexicanos, cuya identidad giraba, entre otras cosas, alrededor de un sentido étnico de pertenencia.[2] En los años siguientes, el Barrio 18 aceptó a muchos salvadoreños inmigrantes, en virtud de su proximidad racial. Por su parte, la MS-13 nació a principios de la década de 1980, y se conformó con jóvenes inmigrantes y refugiados que huían de la guerra civil salvadoreña (1980–1992).[3]

Tanto el Barrio 18 como la MS-13 estaban insertas en un complejo ecosistema de pandillas, conocido como Sur (*Southern United Raza*).[4] De modo muy sintético se puede decir que «los Sureños» constituyen un sistema amplio y conectado de cientos de pandillas de diferente envergadura, membresía y alcance, que viven y operan en el sur de California. Son orientados y regidos por la *Mexican Mafia* («la Eme»),[5] un grupo compuesto por miembros destacados de las pandillas más grandes y famosas de aquella región, que establecen las reglas del juego entre las pandillas «Sureñas».

El Barrio 18 y la MS-13 entraron en disputa directa en 1989 tras un altercado ocurrido en un callejón perdido de Los Ángeles, cerca de la avenida Normandie y el bulevar Martin Luther King Jr., donde murió un pandillero apodado «Shaggy».[6] Desde entonces, ambas iniciaron una guerra abierta en numerosas calles angelinas. Pocos años después, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992,[7] miles de salvadoreños –entre ellos, cientos de integrantes de las dos pandillas– fueron deportados a su país de origen.

Esos pandilleros recién llegados a El Salvador dieron pie a dos acciones clave para la expansión de sus grupos. En primer lugar, desplegaron un intenso reclutamiento de nuevos miembros, que, en la mayoría de los casos, no fue violento, sino voluntario. Para muchos jóvenes de aquellos años, los deportados de Estados Unidos resultaban atrayentes, por la serie de ideas, gestos y símbolos que traían consigo. En opinión de los pandilleros veteranos entrevistados para este informe, fue sencillo cooptar a decenas de niños, adolescentes y jóvenes salvadoreños de entonces.

En segundo lugar, activaron una guerra en varios frentes y flancos con casi todas las estructuras delictivas existentes en el país, como las pandillas barriales, las estudiantiles y las bandas especializadas en distintos delitos (tráfico de drogas, robo de vehículos, etcétera). En poco tiempo, estos grupos fueron eliminados, desplazados o absorbidos (por hibridación) por alguna de las dos maras californianas.

Más adelante, a comienzos del 2000, las pandillas experimentaron transformaciones, como la necesidad de adaptarse a las políticas de mano dura que impulsaron un cúmulo de medidas de persecución y captura masiva de personas sospechosas de pertenecer a las pandillas.[8] En ese período, miles de pandilleros fueron arrestados y encarcelados. Si las maras ya habían eclipsado en la calle a otros grupos delictivos, todavía no lo habían hecho dentro de las celdas policiales (o bartolinas) y las cárceles, donde tuvieron que lidiar con grupos criminales rivales, lo que provocó que los pandilleros cooperaran en actividades de sobrevivencia. De este modo, unos pandilleros que, en las calles, no se habrían conocido, de pronto se volvieron cercanos en los penales y colaboraron entre sí, lo que les permitió forjar estructuras más articuladas, con líderes fuertes y capacidad para operar a escala nacional, una situación que se consolidó en el 2004, cuando el gobierno confinó en prisiones separadas a la MS-13 y al Barrio 18.[9]

Otro proceso importante de esos años tiene que ver con el sostenimiento de los grupos. Al principio, las pandillas se financiaban por diversas vías, desde la petición de «colaboraciones voluntarias» entre los habitantes de los barrios hasta el asalto y el secuestro, pero, cuando las estructuras empezaron a crecer, necesitaron fuentes de ingresos más estables y entonces surgió la idea de practicar extorsiones extendidas y constantes.

Con el objetivo de informar la implementación de estrategias para combatir la extorsión en El Salvador, este informe trata de combinar, en una sola mirada, el punto de vista de los victimarios y el de las víctimas de la extorsión, partiendo de entrevistas con personas que han cometido este delito o lo han padecido.

COMIENZAN LAS EXTORSIONES

Tonacatepeque, El Salvador. Desde prisión o desde los territorios que dominan, los líderes de las pandillas sostienen estructuras extorsivas arraigadas en el país. *© Jan Sochor/Getty Images*

Los mecanismos extorsivos actuales de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 (los Revolucionarios y los Sureños) comenzaron a delinearse en el primer lustro del siglo XXI y, poco a poco, llegaron a ser la principal fuente de financiamiento de las dos pandillas.

Al principio, un sector muy golpeado por las extorsiones pandilleriles fue el transporte colectivo. El Salvador cuenta con un sistema mixto de transporte de pasajeros, en el que, si bien los derechos de línea o ruta son públicos, las unidades (los buses) pertenecen a empresas privadas y, aunque hay regulaciones gubernamentales e incluso reciben un subsidio público, no pertenecen al Estado.

Según los pandilleros entrevistados para este informe, este sector fue escogido como blanco por sus características idóneas: se trataba de un negocio que maneja dinero en efectivo –así pagan los usuarios de los buses– y, además, para abordar a las víctimas no hacía falta arriesgarse a salir de las comunidades controladas por las pandillas, con lo que evitaban exponerse a ser capturados por la policía o atacados por grupos antagónicos.

En una primera instancia, los pandilleros cobraban la extorsión cada vez que los motoristas (conductores) entraban en sus territorios: les pagaban entre uno y cinco dólares por viaje.[10] Este esquema fue cambiando, hasta que los miembros de las pandillas empezaron a entenderse directamente con los propietarios.[11] En algunos casos, tras extorsionar sistemáticamente las rutas de buses, los pandilleros hicieron que las líneas quebraran y las retomaron ellos mismos, convirtiéndose de repente en empresarios del transporte.

Aunque estas dinámicas de extorsión se suelen considerar un problema moderno, por el estilo notorio y extendido que distingue a las maras, nacieron en los años previos a la guerra civil, cuando los contingentes guerrilleros y sus contrapartes

paramilitares extorsionaban a las unidades de transporte.[12] Entre la década de 1970 y la de 1980 era usual que grupos de combatientes de ambos bandos detuvieran a los buses para pedir dinero tanto a los conductores como a los pasajeros.

Otro ejemplo de la conexión entre la etapa del conflicto armado salvadoreño y las acciones presentes de las pandillas se vincula con el comercio en el centro de la capital, San Salvador, donde se concentra una pujante economía informal. Desde la década de 1990 existe en esa zona un mecanismo de cobros ilegales a vendedores por parte de los miembros de las pandillas, aunque esto parece una mera reedición del pasado.

A partir de la década de 1970, la capital salvadoreña empezó a recibir a los desplazados que huían de los enfrentamientos armados entre guerrilleros y militares, especialmente cruentos en el interior del país. Los gobiernos de entonces no contaban con programas específicos de acogida y, por ende, estas personas llegaban sin protección ni apoyo estatal y tuvieron que encontrar una forma de subsistir. Al ser una población mayoritariamente suburbana y rural, con una notable presencia de campesinos, muchos optaron por dedicarse al comercio informal y, en particular, a la venta de vegetales, verduras y frutas. A la larga, fueron las primeras víctimas de los ciclos extorsivos en el centro de San Salvador.

Cuando la guerra civil estaba en declive, los líderes locales crearon asociaciones de vendedores informales, se repartieron el centro de la capital e impusieron cobros ilegales a esos vendedores de extracción campesina. Si alguien quería instalar una venta en una calle o en una esquina, debía pagar semanalmente una cuota al líder de la asociación de vendedores correspondiente.

Como ocurre ahora con las pandillas, la relación no era solo de tipo extractivo, sino que los vendedores informales recibían protección frente a los delincuentes comunes e incluso frente a las autoridades municipales, que en varias ocasiones intentaron desalojarlos de las calles, con el argumento de ordenar y recuperar el centro histórico. Cuando se preveían choques con la alcaldía, los líderes locales organizaban a la gente para plantar cara a los funcionarios municipales.

El centro capitalino ha sido, desde el comienzo, un sitio neurálgico para la operatividad de las pandillas. Cuando estas aparecieron, sus miembros fueron rechazados con agresividad por las asociaciones existentes. Con el tiempo y con violencia, los pandilleros fueron ganando terreno e imponiendo a los vendedores informales sus propios esquemas de extorsión, similares a los de los líderes de las asociaciones. En la actualidad, como ocurre con el transporte público, las pandillas extorsionan directamente a las asociaciones de vendedores, en lugar de a sus afiliados, y los líderes de las asociaciones se encargan de recoger el dinero puesto por puesto.

Esto demuestra la capacidad de adaptación de las pandillas, que han aprendido a hacer más eficientes y lucrativos los ciclos extorsivos, pasando de recolectar el dinero de individuos (motoristas o comerciantes) a exigir el pago a los grupos (propietarios o asociaciones). Es probable que, con un mecanismo menos complejo y un esfuerzo menor, los pandilleros hayan logrado aumentar sus ingresos.

El centro de San Salvador es un sitio neurálgico para la operación de las pandillas.

ESTRUCTURA Y JERARQUÍA DE LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR

MARA SALVATRUCHA 13

BARRIO 18

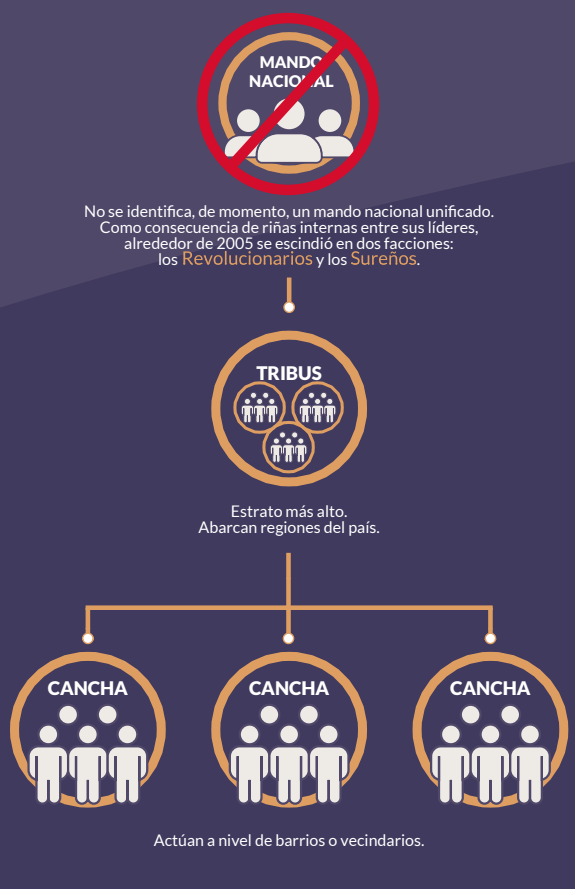

GRÁFICO 1 Estructura organizativa territorial de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

GRÁFICO 2 Jerarquía de rangos de la Mara Salvatrucha.

NOTA: Estas clasificaciones y figuras se han de tomar como modelos, es decir, como una representación simplificada de la realidad, y no como una reproducción exacta.

San Salvador. Si bien en 2020 se reportó una baja en el nivel de denuncias de extorsión, que pudiera ser atribuible a la cuarentena decretada por el gobierno, los números repuntaron con la apertura de las actividades. *© Camilo Freedman/SOPA Images/ Getty Images*

DENUNCIAS DE EXTORSIÓN

En los últimos años, las denuncias de extorsión interpuestas ante la Policía Nacional Civil (PNC) han disminuido, pasando de 2 242 en el 2015 a 1 345 en el 2020, como se puede ver en el gráfico 3:

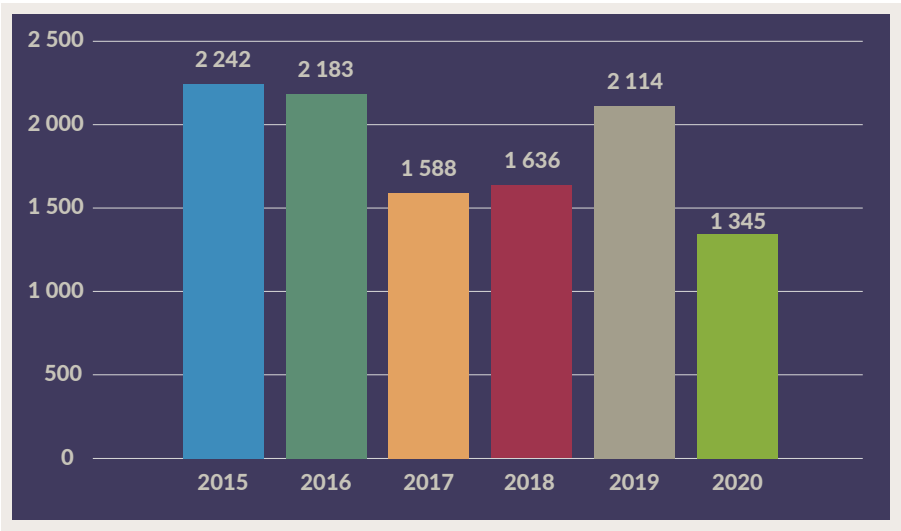

GRÁFICO 3 Denuncias de extorsión en El Salvador, 2015–2020.

FUENTE: Policía Nacional Civil, https://transparencia.pnc.gob.sv/

Para tratar de entender el posible efecto de la pandemia de la COVID-19 sobre las extorsiones, en el gráfico 4 aparecen las cifras desagregadas por mes para los tres últimos años. Entre febrero y abril del 2020 disminuyeron las denuncias de extorsión interpuestas ante la PNC; posteriormente, hubo un alza entre agosto y octubre. Ambos puntos coinciden con el inicio y el final, respectivamente, de la cuarentena decretada por el Gobierno. A finales del 2020, como puede verse, el

nivel era semejante al del 2018. Esto podría ser una muestra, sujeta a comprobación, de que la economía ilegal dependía de la economía legal.

En julio del 2019 se registró un pico notable en las denuncias de extorsión, seguido de una reducción sostenida durante el resto del año. Esto coincide con el segundo mes de la Administración del presidente Nayib Bukele, en el cargo desde junio del mismo año. Desde la perspectiva del Gobierno, podría decirse que esta coincidencia es resultado del llamado Plan Control Territorial, la política pública en materia de seguridad cuyo contenido, a la fecha, es desconocido por la sociedad. Sin embargo, para otros, esto sería reflejo de la posible existencia de un acuerdo o pacto entre el Gobierno y las pandillas.[13]

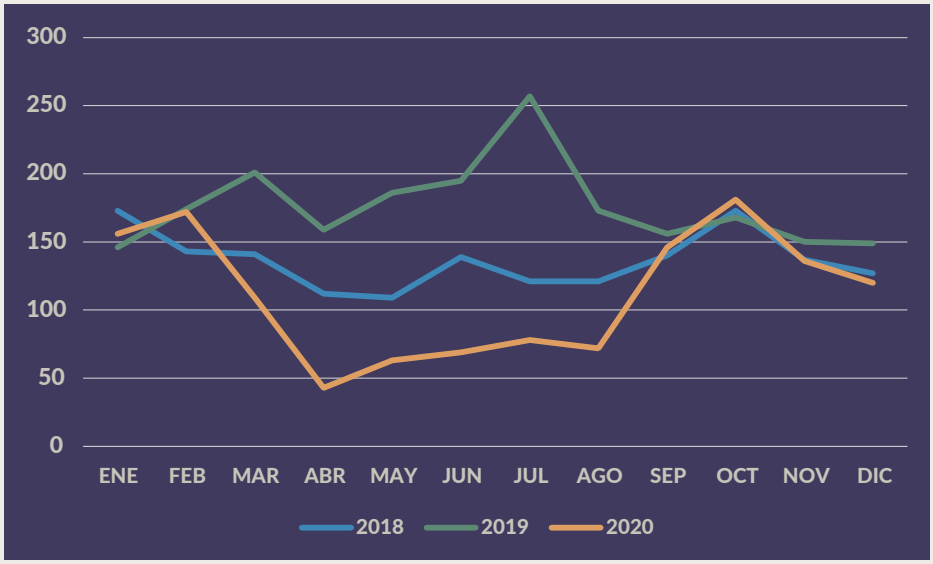

GRÁFICO 4 Denuncias de extorsión en El Salvador, desagregadas por mes, 2018–2020.

FUENTE: Policía Nacional Civil, https://transparencia.pnc.gob.sv/

Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que el indicador de denuncias, sin importar el delito, conlleva dificultades y limitaciones, en buena medida por su ambivalencia, porque tanto el incremento como el decremento de las denuncias se pueden interpretar por igual como positivos o negativos, según el punto de vista. Por ejemplo, en el caso de las extorsiones, si los números aumentan, un enfoque pesimista puede destacar que el problema se ha agravado, mientras que un enfoque optimista puede defender que la confianza ciudadana se ha fortalecido o que los sistemas de denuncias han mejorado y que, por ello, la gente denuncia más. Lo mismo sucede si los números disminuyen.

Este carácter ambivalente de las denuncias obliga a tomar estos datos con cautela y a evitar lecturas unidireccionales, más aún si estas encajan con preconcepciones, lo que puede conducir a sesgos de interpretación.

Desde otro ángulo y conforme al Sistema de Información Penitenciaria, las extorsiones presentan un comportamiento estable dentro de los delitos de mayor incidencia que se reportan entre las personas privadas de libertad, condenadas y recluidas en las cárceles salvadoreñas. El tenue descenso, de menos de un punto porcentual, entre el 2015 y el 2020 no basta para sacar este delito del segundo lugar de la lista, por debajo de los homicidios.

Y aunque ha aumentado ligeramente la población penitenciaria recluida por extorsión, que ha pasado de 6 045 en el 2015 a 7 888 en el 2020 (una diferencia de 1 843 internos), en términos porcentuales hay un decremento poco sustantivo, como se muestra a continuación:

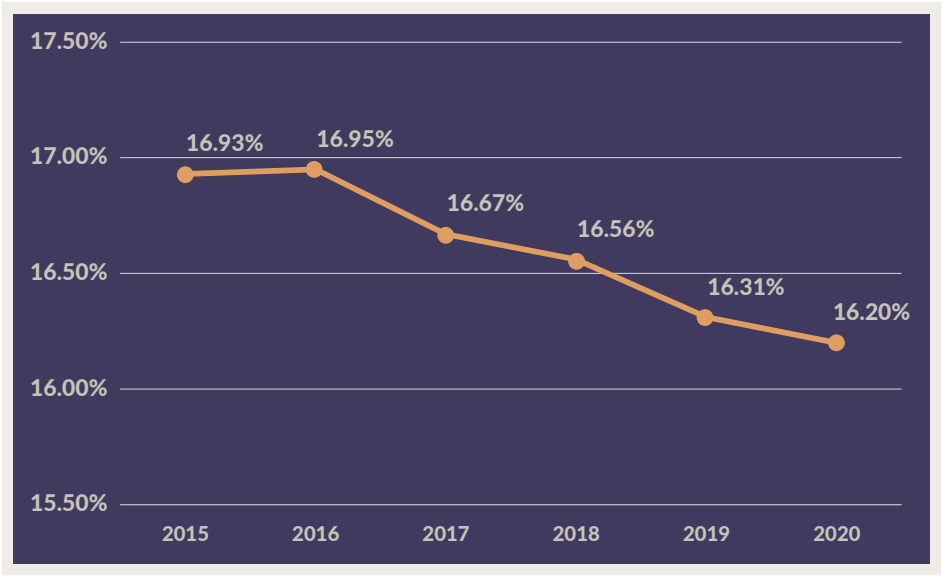

GRÁFICO 5 Porcentaje de las extorsiones entre los delitos de mayor incidencia en el sistema penitenciario de El Salvador, 2015–2020.

FUENTE: Dirección General de Centros Penales, http://www.dgcp.gob.sv/?page_id=250

Sin embargo, estos datos no se refieren exclusivamente a las extorsiones cometidas por los miembros activos de las pandillas. Para realizar un análisis de esa naturaleza, sería indispensable contar con información detallada, que no está disponible a la fecha.

Modus operandi de las maras en El Salvador

Las principales dimensiones del *modus operandi* de las maras en materia de extorsiones se concentran en las siguientes actividades:

- **Obtención de información:** números telefónicos de víctimas potenciales –en el caso de los comercios, pueden presionar a los empleados para que provean los números de los supervisores o los propietarios–, movimientos cotidianos, resguardo del dinero, medidas de protección, etcétera.
- **Negociación:** en concreto, las cantidades a cobrar y la frecuencia o fecha de pago.[14]
- **Utilización del dinero:** por lo general, para cubrir gastos vitales (vivienda, alimentación, etcétera), atención médica, compra de armas o drogas, ayudas a familiares, etcétera.
- **Administración de represalias:** desde amenazas hasta homicidios, pasando por lesiones a las víctimas, sus empleados o sus familiares, y los daños a la propiedad.

San Salvador. El Salvador cuenta con uno de los porcentajes de encarcelados más altos del mundo. Muchos de los encarcelados son presuntos miembros de la Mara Salvatrucha o del Barrio 18. *© Giles Clarke/Getty Images*

FLUJO DEL DINERO

La estructura de las maras se pone en marcha, en materia de extorsión, con la determinación de los montos a exigir, para no asfixiar a las víctimas y perder las fuentes de ingresos. En ese sentido, el primer paso es recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la gestión de los negocios y los puntos débiles en la seguridad de los locales. Uno de los pandilleros entrevistados lo explica así:

> Mirá, vos tenés que hacerle inteligencia al negocio. Acordate de que, generalmente, la información viene de dentro, de los mismos empleados o hasta de la familia. Tenés que ver si tienen vigilantes, si tienen caja fuerte, si el dueño anda armado, si acumula dinero en el negocio o si se lo lleva al banco o a la casa todos los días. Todo eso lo tenés que saber antes de llamarlo. Buscás a alguien que trabaje ahí y lo «terapeás» (convences), le ofrecés algo o le decís que su vida corre peligro, si no te ayuda. Acordate de que, en El Salvador, la mayoría de los trabajadores son explotados y no están contentos con los jefes.[16]

Según los pandilleros consultados, la información que se logra recabar en los primeros momentos es clave para los ciclos extorsivos. Es fundamental conocer las rutinas diarias de las víctimas: «Vos, cuando los llamás, les decís: "Vaya, hoy saliste a tal hora, en el carro tal, con la camisa de tal color y fuiste a este y este lugar", para que sepan que sabés todo de ellos».[17]

La obtención de información incluye verificar que una clica o una cancha de la pandilla contraria no esté extorsionando a la víctima. Si así fuere, los líderes deciden si quieren entrar en una guerra local con los grupos rivales, porque esto suele comenzar una escalada de violencia, cuya intensidad y duración dependerán de la capacidad bélica de las células, que combina los recursos disponibles con el apoyo de las pandillas respectivas. Un ejemplo de esta clase de enfrenamientos desembocó en la llamada «Masacre de la buseta», que tuvo lugar en el 2010 y dejó un total de 17 fallecidos.[18]

Cuando se detecta que un negocio ya está siendo extorsionado por una célula de la misma pandilla, resuelven la eventual controversia los líderes de las clicas o las canchas, no siempre según la lógica de que «primero en tiempo, primero en derecho», sino que suele pesar la distribución geográfica y la fuerza de cada célula. Si el problema se agudiza hasta el extremo de provocar muertos, intervienen los líderes superiores en la jerarquía pandilleril.

En función de la información recopilada por las pandillas, se desarrollan las primeras interacciones con las víctimas de extorsión: «Lo primero, mandás un "cipote" (niño) con un teléfono, o bien le llamás a su teléfono. Ahí te identificás, sin dar mucho detalle, pero que sepa que sos quien sos. Y le decís que te va a dar una cantidad y, si no, que se atenga a las consecuencias».[19]

El cobro del dinero es un paso casi de mero trámite, pues los extorsionados ya están dispuestos a pagar con arreglo a la negociación de los montos, las periodicidades, etcétera. No obstante, los miembros de las pandillas coinciden en que este es el punto más riesgoso para ellos, porque la policía puede capturarlos o las mismas víctimas pueden defenderse con acciones violentas. En palabras de un pandillero: «Vos sabés que la gente se cansa, se emputa. Y el momento del cobro es cuando te pueden sorprender».[20]

Por lo tanto, los pandilleros toman distintas medidas en las zonas en las que prevén recoger el dinero de las extorsiones y suelen preferir lugares bajo su control, en los que puedan reconocer movimientos sospechosos. Un pandillero entrevistado lo describe así:

> Si vos estás hablando con el dueño o la dueña de un negocio y te dice: «Mire, yo me pongo muy nerviosa, hable con mi hermano o con mi tío», esa persona puede ser policía y montan un operativo. Vos tenés que «postear» (vigilar) la casa, o el negocio, desde una noche antes, porque así te vas a dar cuenta si llegan policías a dormir ahí, o no.[21]

El diagrama siguiente ilustra el flujo del dinero proveniente de las extorsiones dentro de la MS-13:[15]

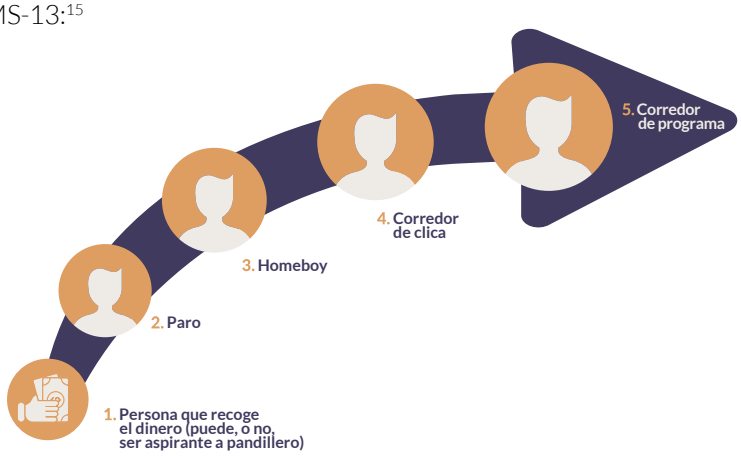

GRÁFICO 6 Flujo del dinero dentro de la Mara Salvatrucha.

NOTA: Los rangos de «chequeo» y «observación» no aparecen, porque, según consta en los expedientes judiciales examinados, su participación se vincula más a la ejecución de represalias contra las víctimas.

Además de dinero, las maras pueden exigir a sus víctimas productos o servicios. Por ejemplo, una clica de la MS-13 pedía tanques de gas a una tienda que se dedicaba a su distribución. Con el tiempo, la pandilla estableció su propia venta de gas y desplazó

Generalmente las mujeres desempeñan trabajos de logística, engaño a las víctimas y tesorería.

a las víctimas. En un negocio de lavado de coches, otra clica de la MS-13 los obligaba a lavar los carros en los que habían cometido asesinatos o transportado algún cadáver.

Si los líderes de las células desconfían de la seguridad de una operación de recaudación de extorsión, por lo general envían a las piezas menos importantes de la clica o la cancha, que suelen ser los aspirantes. De esa forma, si lo capturan, el colaborador perjudicado es fácilmente reemplazable y no puede revelar demasiada información a las autoridades, en caso de volverse informante o testigo.

En ese marco, se utiliza a las mujeres para desempeñar tres trabajos: servir de apoyo a la logística (traslado de dinero, drogas, etcétera); facilitar el engaño a las víctimas (por medio de llamadas o cuentas falsas en las redes sociales), y cooperar como «tesoreras», en el escenario de mayor prestigio para ellas dentro del grupo.

Un componente crucial consiste en preparar una secuencia de agresiones contra las víctimas, sus empleados o sus familiares. Los pandilleros entrevistados afirman que, por lo general, las cadenas de atentados se planifican «de menos a más», con los homicidios como el último eslabón. El uso de la violencia debe ser gradual, para que se sienta una presión progresiva. Se empieza por daños a bienes o lesiones menores a personas: «Podés quemarles un carro, pasar dejando un par de "bombazos" (balazos) en la puerta del negocio, "darle verga" (golpear) a algún empleado».[22]

La intención es causar el menor ruido posible, para no atraer la atención indeseada de las autoridades, pero sin dejar de infundir el temor suficiente para que las víctimas desembolsen los montos solicitados.

Según los miembros de pandillas, no es normal que las víctimas se resistan a pagar. Sin embargo, hay sectores que se muestran más renuentes que otros: «Los ganaderos y los viejos que tienen negocios de lácteos, o cosas así, de lo rural, son los más bravos. Esos viejos están armados».[23]

Según los expedientes judiciales estudiados, en las áreas rurales existen clicas de la MS-13 que llevan a cabo estrategias de financiamiento que van desde imponer extorsiones a pequeños emprendimientos de agricultores y ganaderos hasta montar iniciativas propias. Por ejemplo, una de las iniciativas consistía en la compra y la crianza de un hato de vacas. De hecho, en los documentos se describía que algunos pandilleros se encargaban de cuidar, alimentar y mantener saludable el ganado.

Finalmente, en cuanto a la utilización del dinero procedente de las extorsiones, las fuentes consultadas señalan que los líderes de las estructuras son los que más se lucran. Un exlíder pandilleril, miembro de la ranfla nacional de la MS-13 entre el 2002 y el 2017, relata lo siguiente: «Yo tenía salario, pago de casa, pistola propia, carro, dinero para gasolina y, de vez en cuando, algún "alivián" (beneficio) extra, si yo quería».[24]

Según este pandillero, la formación de los programas respondió a la necesidad de distribuir los ingresos de la pandilla de forma equitativa, para que las clicas que no conseguían recaudar dinero de las extorsiones, por estar lejos de los nodos de actividad económica, pudieran contar con un fondo del programa. Al mismo tiempo, cada líder de un programa podía usar a pandilleros de una clica pobre como carne de cañón para tomar represalias contra las víctimas de extorsión.

Según la misma fuente, el dinero siempre se había administrado desde los centros penales, donde guardan prisión los principales líderes de las maras y donde se tomaban las decisiones sobre el destino de los recursos (necesidades varias de las clicas o las canchas, ayudas a familiares, etcétera), pero, en virtud de las crecientes medidas gubernamentales de aislamiento de los internos, la relación entre las cárceles y las calles se vio afectada, lo que ha relajado la obligación de los jefes de las células de pagar tributo a los líderes dentro del sistema penitenciario y, en definitiva, les ha otorgado mayor libertad y discrecionalidad en cuanto a la administración del dinero. En algunos casos, esta situación ha redundado en el abuso de ciertos jefes locales, con las consiguientes luchas intestinas.

Tanto los miembros de las pandillas como los funcionarios entrevistados piensan que la MS-13 se está enfocando en el incremento del capital ilícito y en su administración, para dar un salto hacia el lavado de activos, empleando el dinero de las extorsiones como capital semilla para emprender negocios de apariencia legítima. Dos ejemplos: un programa del oeste del país, situado cerca de la costa marítima, que abrió algunos moteles a través de testaferros, y un programa de San Salvador, que habría adquirido una flota de vehículos para que trabajen como taxis.

Vida pandilleril en San Salvador

Lento creció en el municipio de Mejicanos, donde vivía con su familia, en el sector conocido como la Montreal. Su padre falleció cuando era niño. Como le pegaba, Lento encontró en las pandillas el amor que necesitaba. Su madre era vendedora en el centro capitalino y, cuando él tenía nueve años, se empezó a acercar a los pandilleros de esa zona.

Antes del arribo de los pandilleros deportados de Estados Unidos, el centro de San Salvador había estado dominado por pandillas estudiantiles, que ejercían allí su rivalidad simbólica y física. Estos fueron los primeros pandilleros con los que tuvo contacto Lento, no porque perteneciera a alguna de las instituciones que entraban en conflicto de modo reiterado y casi ritualizado, sino porque compartía espacio y admiraba a esos muchachos, por sus símbolos de identificación y el estatus que les otorgaba su violencia.

A finales de la década de 1990 se produjo una expansión de los grupos pandilleriles de origen californiano. Los estándares de reclutamiento no eran tan estrictos ni los mecanismos de selección, tan sofisticados. Fue un período de férrea competencia entre las dos pandillas hegemónicas por incorporar al mayor número posible de miembros. Lento no alcanzó a ingresar en la MS-13, pero exploró la oferta y participó tanto en reuniones como en algunas acciones de poca monta, aunque quedó desencantado por las actitudes despóticas de los líderes locales.

Entonces dejó de relacionarse con los miembros de la MS-13 y comenzó a frecuentar a pandilleros del Barrio 18, con lo cual ya no podía visitar a su madre, puesto que la zona de la Montreal era un bastión de la MS-13. Esto agudizó la separación de su familia y su entrega a la pandilla fue más acelerada y profunda.

Llegó a ser un pandillero activo del Barrio 18 y líder de una célula importante. Ha estado en prisión y ha sostenido un extraño proceso de retiros y reingresos a la pandilla. Cuenta con una larga trayectoria en materia de extorsiones y otros delitos.

Su vida pandilleril se situó, sobre todo, en el centro de la capital. Lento y su grupo pedían contribuciones esporádicas que, en realidad, no eran opcionales. Si los vendedores no les daban el dinero, se exponían a robos o agresiones físicas, pero no había un cobro sistemático y, en cierto modo, quienes decidían los montos eran los mismos vendedores. Venía a ser una actividad a medio camino entre pedir limosna y extorsionar.

Con la instauración de las cuotas periódicas, surgieron las necesidades administrativas en el grupo y empezaron a marcarse más las jerarquías internas y también los conflictos. Comenzaron los abusos y la desconfianza. Uno de los subterfugios usados por los líderes locales era fingir que les habían hecho un cateo policial en sus casas y les habían decomisado el dinero, cuando en realidad lo habían utilizado para cuestiones personales. Esto despertaba la furia de los pandilleros de menor rango y daba pie a sangrientas revueltas dentro de las células.

La escalada de extorsiones alcanzó tal nivel que, en 2005, la cancha de Lento recaudaba más de 50 mil dólares por mes, lo que les permitió poseer lotes enteros de celulares, vehículos comprados legalmente, armas, casas de seguridad y superar los estadios de pobreza que padecían antes de ingresar en la pandilla y en los primeros años de su membresía.

No obstante, la economía ilegal de la pandilla creció más rápidamente que su capacidad de administración. El dinero no solo debía sufragar los costos de las batallas con la MS-13 y otros gastos de los pandilleros, sino que también debía fluir hacia sus familias. De esta forma se fue estableciendo un orden: los pandilleros líderes recibirían sueldo, carro, pago de casa y arma propia; los miembros reconocidos del grupo, aunque no fuesen líderes, recibirían un monto menor, pero que les permitiría vivir con ciertas comodidades, y los pandilleros rasos recibirían cantidades suficientes para subsistir y una serie de pequeños beneficios, como ropa y bonos ocasionales. Lento fue uno de los

pandilleros más respetados de su estructura y su bravura y capacidad de liderazgo le aportaron beneficios. Logró vivir en una colonia privada y cobrar un salario de unos 500 dólares mensuales.

Sin embargo, las pandillas son agrupaciones de rápida rotación y, debido a las dinámicas de intensa violencia, los líderes no duran mucho tiempo en sus cargos, pues son asesinados, derrocados, sustituidos o encarcelados. Por su parte, los pandilleros rasos tratan de ascender en la jerarquía. Por ende, a pesar de todo, los conflictos se acrecentaron y las guerras internas dejaron de ser una excepción y se convirtieron en la norma.

Para el año 2009, la policía ya había afinado una serie de estrategias para perseguir este tipo de delitos y decenas de pandilleros, entre ellos Lento, fueron apresados y acusados de extorsión. Lento pasó ocho años en prisión.

Una de las pocas cosas que revela de su vida en la cárcel fue que se incorporó a una iglesia y a un movimiento evangélico y abandonó la pandilla por un tiempo. Cuando quedó en libertad, Lento pertenecía a ese movimiento evangélico y estaba fuera de las actividades pandilleriles, pero, al cabo de pocos meses, las carencias económicas de su familia lo llevaron a reincorporarse al Barrio 18.

En 2016 retomó las riendas de su cancha. La encabezó durante un período breve, pero comenzó a ser criticado por las mismas actitudes despóticas y abusivas de las que él se quejaba cuando no era líder. En consecuencia, se produjo una suerte de amotinamiento y fue relevado de su cargo, con lo cual perdió, además del poder, los beneficios económicos.

Ahora Lento vive en un limbo ambiguo con respecto a la vida pandilleril. Aún participa en el movimiento evangélico, pero también guarda una estrecha relación con la pandilla. Incluso una de sus fuentes de ingresos implica mediar entre pequeños comerciantes y sus excompañeros de cancha. Este trabajo de mediación, cuyo propósito es reducir o hasta suprimir las extorsiones, le granjea modestos pagos en dinero o en especie por parte de esos comerciantes.

© Jan Sochor/Getty Images

El transporte público ha sido blanco preferido de las pandillas en El Salvador desde el año 2000. *© Camilo Freedman/SOPA Images/ Getty Images*

LAS VÍCTIMAS

Las víctimas consultadas para este informe confirman que las dinámicas de extorsión comenzaron antes de la guerra civil salvadoreña. Una de las víctimas –en la actualidad, es empresario del transporte público– sufrió la primera extorsión a finales de la década de 1970:

> Fui donde un capitán de la (extinta) Policía de Hacienda y le comenté. Él puso a unos investigadores. Cuando llegaron, por segunda vez, a dejarme un papel a la casa, pidiéndome 10 mil colones, yo los identifiqué. Eran unos vecinos: el hijo de un vecino que tenía un prostíbulo, junto con un soldado. No eran guerrilleros, pero se estaban haciendo pasar.[25]

Los mecanismos de aquellas extorsiones eran tan rudimentarios –un papel debajo de la puerta con amenazas explícitas– como las maneras de combatirlas, tanto por parte del Estado como de los particulares. La fuente concluye su relato: «Fui donde el capitán y le di los nombres de las personas que había visto yo que llegaron a dejarme ese papel. "Vaya, no te preocupés", me dijo. A los tres días me llamó. "Andá a la quebrada, ahí te dejé algo", me dijo. Me fui. Cabal, ahí estaban los dos cadáveres».

Por recomendación del capitán al que acudió en busca de ayuda, la víctima vendió su casa y se marchó. Temía las represalias de la familia de los extorsionistas y sabía que la policía no podría protegerlo.

Otras personas entrevistadas, con experiencias mucho más recientes, cuentan que los ciclos extorsivos empezaron a afectarlas alrededor del primer quinquenio del siglo XXI. Quienes más sintieron el embate fueron los empresarios del transporte. A este respecto, una fuente describe: «Al principio, los mareros se subían y le pedían al conductor unas monedas por cada vuelta que daba por su territorio, ahí donde ellos pasaban. Era casi como un favor. Ya después eran cuotas fijas».[26]

Con los años, se recrudeció el terror y las maras llegaron a asesinar a motoristas y empresarios de buses. Por lo general, las víctimas deben reacomodar su vida e introducir notables ajustes financieros en sus negocios. Al menos dos de las personas consultadas tuvieron que despedir empleados para bajar los costos de operación. Los despidos han sido recurrentes en el sistema del transporte colectivo, ya que, en ocasiones, las clicas y las canchas de distintas zonas obligan a los empresarios de buses a contratar a pandilleros para hacer labores como el lavado de las unidades. Los empleados que hacían esas tareas fueron cesados o tuvieron que incorporarse a las pandillas para seguir trabajando.

Las consecuencias de la extorsión no son solo de índole económica, sino también social y psicológica. Una víctima entrevistada lo expresa así: «Al pagar, hay cierta tranquilidad. Pero yo he caído en depresión. Ando sin ganas de estar pendiente de los negocios, debido a lo incontrolable de la situación. No voy viviendo al día, pero sí al mes. El trabajo que hacen con uno es psicológico. Si todos aprendiéramos a ganarles emocionalmente a ellos, esto se acaba».[27]

Al parecer, las víctimas sufren estados permanentes de estrés, ansiedad y desesperanza o indefensión y desconfían tanto de las instituciones formales como de sus vecinos. Tratan de pasar desapercibidas. No se sienten cómodas sobresaliendo ni destacando en ningún sentido, por miedo a volver a ser blanco de extorsiones. Lo ideal es que, en su estilo de vida, sus negocios y hasta su aspecto personal, se vuelvan invisibles, con lo cual sus emprendimientos tienden a estancarse y a no crecer. Además, no usan las redes sociales, por temor a suministrar, sin querer, información útil para futuros extorsionistas.

Por otro lado, las víctimas se resisten a interponer denuncias, porque desconfían de la capacidad de la policía para resolver el problema. Algunas incluso tienen la impresión de que la PNC está en connivencia con los delincuentes. Una fuente cuenta su caso:

> Nunca puse una denuncia. Una vez hablé con un detective y me dijo: «La Policía no la va a andar cuidando. Su nombre va a ser revelado y el de su negocio y todo. El abogado va a saber y les puede decir a ellos. Así que usted no va a llegar ni a la segunda audiencia». Con eso, prácticamente me dijo que no lo hiciera.[28]

Por último, las víctimas de extorsión consultadas manifestaron valorar, constantemente, la posibilidad de emigrar. Una fuente propone lo siguiente: «Los "gringos" se quejan y se quejan de los ilegales. ¿Quieren que se termine la migración? Acaben con la extorsión en El Salvador».[29]

«Esto no es vida», conviviendo con la extorsión

La Señora es comerciante desde hace 14 años y víctima de extorsión permanente desde hace 11. Es propietaria de cinco tiendas pequeñas de venta de ropa al mayoreo, en zonas con presencia de maras, algunas en territorios de «las Letras» (MS-13) y otras en sectores de «los Números» (Barrio 18), como ella les dice, así que ha tenido que aprender a interactuar con distintos grupos y diversas clicas y canchas.

En agosto de 2009, dos miembros de las Letras llegaron a uno de sus locales con una actitud intimidatoria. Ella se había preparado psicológicamente, a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación. Según recuerda: «Me hice a un lado del mostrador y les dije que los iba a atender. Me armé de serenidad y les comenté que ya los estaba esperando, debido a lo que había escuchado a través de los medios. Les expliqué que estaba dispuesta a colaborar, pero que teníamos que llegar a un acuerdo, porque yo quería trabajar».

Uno de ellos adoptó un tono amenazante, mientras que el otro le decía que se calmara y que iban a hablar. Al principio le pidieron 75 dólares mensuales, que recogerían el día 30 de cada mes, empezando de inmediato. A pesar de los insultos, ella pudo negociar. Calculó que podía darles un dólar diario. Uno se ofendió, pero el otro aceptó y convenció al primero de que la oferta estaba bien».

Con los Números fue diferente. Cuando la buscaron por primera vez, en 2015, llegaron a su local unas personas con un teléfono celular. Como ella no estaba, ultrajaron al empleado y le dejaron un recado. Para ella, el teléfono es un canal común para establecer el contacto inicial. Luego puede desarrollarse más el trato cara a cara.

Al principio, en una sola oportunidad le pidieron 1 700 dólares y no le dieron ningún margen para negociar. Después se estableció una cuota de 75 dólares mensuales, aunque, a juzgar por su experiencia, el Barrio 18 suele pedir pagos por adelantado y también añadir cobros extras, en momentos particulares. Según ella, la identificaron como potencial víctima a raíz de la información que algunos de sus vecinos comerciantes trasladaron a las pandillas. «Llego a un local y a mí no me conocen, no saben quién soy. Si los vecinos que venden a su alrededor no conocen nada suyo, entonces los pandilleros no tienen de dónde obtener información. Y ellos, así por así, no llegan».

En ciertos casos, la Señora ha visto que la cuota de la renta se incrementa, en especial para los locales con más productividad. Con la MS-13, arrancó en 30 dólares y hoy paga 60. Con el Barrio 18, en cambio, comenzó pagando 75 dólares y esa cuota aún se mantiene. Desde su punto de vista, «si ellos ven que el negocio es próspero, no le tienen lástima. Son más duros».

Para lidiar con la situación, ella se enfrentaba directamente con los extorsionistas, pero su familia le pidió que no lo hiciera más. Hoy, un amigo policía que se hace pasar por su esposo dialoga y negocia con ellos. Así puede ordenar los entendidos con las diferentes clicas y canchas, pero los acuerdos no siempre son sostenibles. «Se logra trabajar con tranquilidad por períodos máximos de, aproximadamente, tres meses. Luego, ya vuelven a pedir pagos por adelantado».

Le inquietan la libertad y el descaro con los que operan los miembros de las pandillas: «Nosotros tenemos cámaras de video y grabamos, pero a ellos no les importa, porque bien saben que las autoridades no hacen nada. No tienen temor de que se les denuncie, puesto que los casos no llegan a término. Se caen en las primeras audiencias, porque amenazan a las víctimas».

En el cobro de la extorsión también participan mujeres que cumplen un rol auxiliar. No intervienen en la negociación. «Son denigradas, utilizadas solo para recoger el dinero. Se ven mujeres embarazadas, con bebés o sexoservidoras», cuenta.

Actualmente, el temor se extiende a la institución policial: «Tenemos miedo, porque la policía no hace ninguna investigación. Si los policías ven que yo les estoy dando dinero a los pandilleros, a los que andan vigilando, y los interceptan a la salida del local, los revisan y ven que llevan dinero, entonces la policía me pone a mí como financista. Nosotros estamos mal por los dos lados. Nadie nos da protección. Si no les damos, ellos nos van a matar, y si les damos, la policía nos va a meter en la cárcel o nos va a hacer un gran proceso y eso nadie lo quiere».
Si hay problemas con el pago de la extorsión, la Señora sabe que corre un grave peligro. La han amenazado con

matarla. «La amenaza fue contra mí y los que trabajan conmigo. Gracias a Dios, no conocen nada más de mi familia, porque he tomado precauciones», puntualiza. Tiene claro que el pago debe ser en efectivo (jamás en especie) y en persona. Realizar depósitos en cuentas bancarias, por ejemplo, es impensable para ella y asume que eso podría exponer a las pandillas.

Ahora bien, si todo marcha sobre ruedas, ellos le han ofrecido seguridad, protección, la garantía de que no habrá robos y de que nadie la va a molestar. Es más, si tuviese algún inconveniente de esa clase, le sugieren que les avise, para que puedan tomar medidas. Ella recuerda que, «antes de pagar la renta, nos asaltaron y nos amenazaron, junto a mi hijo, con pistolas en la cabeza, en las costillas.» Desde que pagan, los asaltos cesaron.

En esta dinámica, la pandemia de la COVID-19 no parece haber tenido efecto alguno, al menos en el largo plazo. «Después de la pandemia, las extorsiones han subido de gran manera y nos han hostigado más. Quizás ahora tienen más necesidad económica y están molestando más. La cuota no ha subido, pero han pedido colaboraciones puntuales adicionales», afirma.

La Señora reconoce que hay zonas donde la presencia de las maras es inferior, pero allí suele haber menos gente y los negocios no resultan rentables. Por ende, la mudanza dentro del país, como probable alternativa, no es tan atractiva. Así, como balance general, reflexiona: «Yo tengo un pensamiento de que esto es para mientras. Mientras agarro fuerzas, reúno el dinero o pago mis deudas, porque yo me quiero ir y ese pensamiento hace que no me sienta estable emocionalmente».

A la fecha, ha vendido dos vehículos para poner un dinero en el banco y tramitar los permisos para irse a vivir a otro país. Teme por sus hijos. Aunque le ha ido bien económicamente, no quiere dejarles el negocio a ellos, por temor a que los maten o los secuestren: «Si no fuese por la extorsión, yo tengo la vida hecha. Esto es desgastante. No quiero vivir así. Quisiera irme con mis hijos, quizás a vivir en un lugar rural y tener paz y saber que estamos bien. A veces voy en el carro y me preparo emocionalmente, porque siento que me van a pegar un balazo en la cabeza. Esto no es vida».

© Camilo Freedman/Aphotografia/Getty Images

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

San Salvador, El Salvador. Las víctimas de extorsión sufren consecuencias económicas, psicológicas e incluso físicas.
© Giles Clarke/Getty Images

Las consecuencias de la extorsión en El Salvador no son solo de índole económica, sino también social y psicológica. Como se ha expuesto en este informe, las víctimas de este delito afrontan estados permanentes de estrés, ansiedad, desesperanza e indefensión. Además, desconfían tanto de las instituciones formales como de sus vecinos. Para combatir este delito, se pueden plantear dos tipos de recomendaciones, unas oficiales y otras que podrían considerarse extraoficiales.

En el terreno oficial, hay que fortalecer las capacidades institucionales para encarar la problemática de las extorsiones por medio de acciones como las intervenciones telefónicas o las entregas controladas de dinero. Asimismo, es clave promover la transparencia y el acceso a datos administrativos de calidad, a fin de efectuar análisis estadísticos sofisticados e informar la formulación y gestión de políticas públicas basadas en evidencia empírica.

También habría que estimular la participación y la colaboración ciudadanas a través de la interposición de denuncias y el traslado de información, entre otras acciones. Para ello, es preciso incrementar y robustecer los programas de protección de víctimas de extorsión.

Aunque algunas de estas medidas ya se han implementado en El Salvador, la escasez de evaluaciones rigurosas de resultados e impacto sobre las políticas públicas de seguridad hace muy difícil identificar qué ha funcionado, y qué no, en los últimos años para prevenir y combatir el delito de extorsión.

En cuanto a las recomendaciones extraoficiales, a partir de la experiencia concreta de las víctimas de extorsión se proponen acciones como mantener un perfil bajo, guardar absoluta discreción sobre el manejo de los negocios

(ante los empleados, los vecinos, etcétera) y conocer bien a los policías de la localidad, para poder colaborar mejor con ellos.

Finalmente, hay que extender los estudios en esta escurridiza materia, en particular desde la perspectiva estrictamente financiera y patrimonial. Es importante abordar aspectos como el blanqueo de capitales, el lavado de activos y la corrupción política, con miras a perseguir el dinero. Esto implica acercarse al fenómeno de las maras en su faceta de crimen organizado.

REFERENCIAS

1 Marco Lara Klahr, *Hoy te toca la muerte: El imperio de las maras visto desde dentro*, México, Editorial Planeta, 2006.
2 Luis Enrique Amaya y Juan José Martínez, Escisión al interior de la pandilla Barrio 18 en El Salvador: Una mirada antropológica, *Revista Policía y Seguridad Pública*, n.º 7, El Salvador, CINC-ANSP, enero–junio del 2015.
3 Luis Enrique Amaya y Juan José Martínez, Los sistemas de poder, violencia e identidad al interior de la Mara Salvatrucha 13: Una aproximación desde el sistema penitenciario, *Anuario de Investigación 2011*, n.º 1, El Salvador, UFG Editores, 2013.
4 Luis Enrique Amaya y Juan José Martínez, Sureños en El Salvador: Un acercamiento antropológico a las pandillas de deportados, *Revista Realidad y Reflexión*, n.º 39, El Salvador, UFG Editores, enero–junio del 2014.
5 Chris Blatchford, *Mafia Chicana: Memorias de René "Boxer"* Enríquez, México, Ediciones B, 2011.
6 Carlos Martínez y José Luis Sanz, El origen del odio, El Faro, 6 de agosto del 2012, http://www.salanegra.elfaro.net/es/201208/cronicas/9301/.
7 Los Acuerdos de Paz firmados en enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, constituyeron la conclusión del proceso de negociación entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que puso fin a la guerra civil salvadoreña.
8 Sonja Wolf, *El Salvador's Pandilleros Calmados: The challenges of contesting Mano Dura through peer rehabilitation and empowerment, Bulletin of Latin American Research, Journal of the Society for Latin American Studies*, n.º 2, abril del 2012.
9 Roberto Valencia, El país que entregó las cárceles a sus pandilleros, El Faro, 1 de septiembre del 2014, http://www.salanegra.elfaro.net/es/201408/cronicas/15861/El-pa%C3%ADs-que-entreg%C3%B3-las-c%C3%A1rceles-a-sus-pandilleros.htm.
10 El oficio de motorista (conductor) de bus se fue volviendo una actividad riesgosa, ya que las pandillas los atacaban con frecuencia.
11 Es posible que este cambio en la extorsión al transporte –dejar de enfocarse en los motoristas para centrarse en los propietarios– se debiese al afán de volver más eficientes los procedimientos extorsivos, al focalizarse en una menor cantidad de víctimas, sin reducir los montos globales de lo recaudado.
12 Adicionalmente, el paro al transporte público fue una práctica habitual antes y durante el conflicto armado. Las organizaciones ligadas a la izquierda política empleaban este recurso para perjudicar la imagen del gobierno de turno y socavar sus períodos de estabilidad. Décadas después, las maras hicieron algo parecido. Por ejemplo, en el 2015, en uno de los episodios más recientes de esta clase, las pandillas promovieron un paro de buses en el país, cuando quisieron mostrar fuerza en el marco de un complicado diálogo con la Administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014–2019).
13 Carlos Martínez y otros, Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia, El Faro, 23 de agosto del 2021, https://elfaro.net/es/202108/el_salvador-/25668/Gobierno-de-Bukele-negoci%C3%B3-con-las-tres-pandillas-e-intent%C3%B3-esconder-la-evidencia.htm.
14 La pandemia de la COVID-19 habilitó un espacio para renegociar, al menos por unos meses, las condiciones convenidas con antelación.
15 Con respecto al Barrio 18 se dispone de menos datos, puesto que los expedientes judiciales a los que se tuvo acceso abordaban procesos abiertos, en particular, contra la MS-13.
16 Entrevista con un pandillero, San Salvador, enero del 2021.
17 Ibid.
18 Juan José Martínez, *Ver, oír, callar: En las profundidades de una pandilla salvadoreña*, El Salvador, Aura ediciones, 2013.
19 Entrevista con un pandillero, San Salvador, enero del 2021.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Entrevista con un pandillero, Sonsonate, febrero del 2021.
24 Ibid.
25 Entrevista con una víctima de extorsión, San Salvador, enero del 2021.
26 Entrevista con una víctima de extorsión San Salvador, diciembre del 2020.
27 Entrevista con una víctima de extorsión, Santa Ana, diciembre del 2020.
28 Ibid.
29 Entrevista con una víctima de extorsión, San Salvador, enero del 2021)

GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 500 Expertos alrededor del mundo. The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net